PRESENTACIÓN

Eduardo Stordeur (h), Enrique Ghersi Silva

Los economistas clásicos tenían bien presente la estrecha y fundamental relación entre instituciones y desempeño económico. Décadas después, consecuencia del desarrollo y creciente aceptación del modelo de competencia perfecta entre los economistas del siglo XX y la mayor especialización en la profesión académica, el legado clásico fue prácticamente olvidado. Los economistas centraron su atención en el examen de las propiedades de los mercados en equilibrio bajo supuestos tan abstractos y estrictos que virtualmente excluían a las instituciones, las que eran consideradas condiciones exógenas al modelo.

Hasta finales de la década del cincuenta, de ese modo, la teoría económica convencional se ocupó fundamentalmente de las reglas que subyacen a procesos de distribución y producción de bienes escasos en mercados explícitos de bienes y servicios. Pocos, muy pocos autores y escuelas o corrientes de investigación, algunas de ellas relativamente marginales como la Escuela Austriaca de Economía o los institucionalistas americanos, se ocuparon de la incidencia de las instituciones en el proceso económico y sus relaciones.

Sobre finales de la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta, sin embargo, muchos economistas ortodoxos comenzaron a aplicar teoría de precios a fenómenos extra mercantiles. Este proceso de extensión de la economía a ciencias sociales contiguas fue además acompañado de un creciente interés de los economistas por las instituciones, fenómeno que tuvo fundamental expresión en el enorme desarrollo de corrientes de investigación tan fundamentales al pensamiento social contemporáneo como la economía institucional, el análisis económico del derecho, la economía de la organización, la elección pública, la economía de los derechos de propiedad y otras disciplinas relacionadas. De ese modo la economía progresivamente se constituye en un método general, muy extendido, de investigación en ciencias sociales.

Este proceso tuvo claramente también su capítulo latinoamericano. Hoy, cada vez son más las instituciones educativas que en nuestra región han incorporado cursos, materias, contenidos y hasta programas de postgrado completos que incluyen algunas o varias de las variantes de investigación económica de las instituciones. ESEADE, probablemente por la enorme influencia de Escuela Austriaca de Economía en sus claustros, fue en este sentido probablemente uno de los pioneros en el mundo de habla hispana en introducir estas nuevas corrientes de investigación. Un simple examen de ediciones de la Revista Libertas (hoy RIIM) y los entonces novedosos contenidos de los programas Master muestran claramente una enorme presencia de autores y trabajos afiliados al enfoque económico de las instituciones, tanto en su variante tradicional como evolucionista, hoy tan a la vanguardia en la investigación social.

Este número de RIIM sobre “Instituciones y Economía” renueva una vez más ese enorme compromiso de ESEADE con el enfoque económico de las instituciones, poniendo a disposición de lector de habla hispana estudios completamente originales llevados adelante por destacados autores hispanoamericanos, especialistas en temas de economía e instituciones, elección pública y economía del derecho.

Inicialmente, en el campo del “Análisis Económico del Derecho”, Hugo Acciarri, Andrea Castellano y Andrea Barbero, del conocido equipo de la Universidad Nacional del Sur, presentan un original trabajo sobre economía de los procedimientos. Los procesos judiciales conllevan costos, tanto públicos como privados, los cuales razonablemente se incrementan cuando hay dilaciones innecesarias en los procesos. Los autores examinan la incidencia que tiene el nivel de la tasa de interés judicial respecto de los incentivos para demorar o dilatar innecesariamente el proceso. Una tasa judicial muy baja, por ejemplo, genera incentivos para dilaciones injustificadas en los procesos, en tanto estos son análogos a créditos a baja tasa de interés. En este novedoso trabajo, introduciendo una muy original modificación al modelo ortodoxo de economía de los procesos judiciales, muestran las muy estrictas condiciones que debe satisfacer una tasa de interés no distributiva o neutral que no genere incentivos

para demorar o dilatar innecesariamente los pleitos. Las conclusiones son variadas y muy interesantes, tanto como las recomendaciones normativas. Las dejamos al lector.

Del derecho de los procedimientos pasamos al derecho de los contratos, una de las áreas del sistema legal donde con mayor éxito fue empleada inicialmente la teoría económica. La jurisprudencia y la doctrina han empleado diversas reglas acumuladas por la experiencia para resolver problemas de interpretación. Alfredo Bullard González, apelando a herramientas de análisis económico examina en este novedoso trabajo el complejo problema de la interpretación contractual. El autor ofrece un replanteo conceptual del problema de la interpretación de los contratos y un marco aproximativo para resolver eficazmente el problema de la interpretación, apelando al modelo tradicional de la economía de los contratos.

De los contratos, pasamos a la economía de las decisiones colectivas, con el trabajo de Martín Krause, Director General del CIIMA- ESEADE, quien se ha ocupado largamente de temas de economía e instituciones. El autor observa que para muchos las instituciones liberales concebidas para limitar el poder han fracasado, a la luz del notable incremento de las atribuciones y tamaño del Estado durante el siglo XX. Además, que en parte, los mismos problemas que hacen difícil a los mercados producir bienes públicos afectan el cálculo económico e incentivos para producirlos eficientemente en el sector público o estatal. A diferencia de los procesos de mercado, además, en las decisiones colectivas, quienes toman las decisiones no se hacen cargo de los costos y beneficios de éstas, entre otros problemas. Los consumidores – ciudadanos, no tienen modo de revelar preferencias y los oferentes políticos, aun si contaran con la información, tampoco tienen incentivos para limitar el poder y orientar mejor la oferta de bienes públicos. El autor examina críticamente la literatura más avanzada sobre el problema, en sus más diversas vertientes, y centra su atención en los incentivos derivados de la competencia institucional entre los diversos gobiernos en el contexto de mayor competitividad que permite la globalización. Culmina mostrando los índices más relevantes de calidad institucional, con especial énfasis en Argentina.

También en el ámbito de las decisiones colectivas, Carolina Leister, de la Fundación Getulio Vargas, nos trae una interesante aplicación de los modelos de A. Downs y G. Tullock al acuciante problema constitucional boliviano. La lectura del problema por medio de estos dos conocidos modelos permite una mirada profunda y comprensiva de los incentivos que subyacen a las diversas opciones institucionales respecto del tipo de regla de toma de decisiones a adoptarse. Asumiendo la idea de Buchanan de que la adopción de una regla de mayoría determina de modo endógeno los resultados, la autora examina críticamente las consecuencias de la adopción de una regla de mayoría simple y una de mayoría calificada de tres cuartos. Las consecuencias son muy diversas y críticas para el complejo problema institucional que enfrenta Bolivia.

En “Libertad Económica y convergencia en Argentina: 1875 – 2000”, Isabel Sanz Villaroya examina un tema que ha dejado perplejos a muchos investigadores sociales, en los mas diversos ámbitos de especialidad y que tiene enorme relevancia para la economía institucional: las causas de la impresionante declinación Argentina. Tomando como base países de la OCDE y empleando un índice de libertad económica, la autora evalúa el impacto de las instituciones en el (mal) desempeño argentino. La autora muestra estadísticamente que la relación entre libertad económica y la evolución de la serie relativa de PBI per cápita de Argentina respecto de los países de la OCDE son similares, mostrando la relación entre ambas variables. La autora ilustra, en suma, la incidencia de las instituciones que hacen posible la libertad en las transacciones en el crecimiento económico. Si bien la idea tiene larga data, el presente trabajo constituye una impresionante demostración analítica para el caso de la Argentina.

Pero las relaciones entre economía e instituciones admiten varias formas. No sólo las instituciones establecen las “reglas del juego” que especifican el tipo de intercambios que “da forma” a la economía. Además, cambios en precios relativos, costos de transacción, tecnologías e “ideas económicas”, pueden tener impacto sobre las instituciones. Esto último es el tema de investigación del constitucionalista y economista del derecho, Juan V. Sola. El autor examina en su trabajo críticamente las ideas Keyne-

sianas y su impacto institucional, en particular la enorme influencia que éstas tuvieron en la universalmente influyente jurisprudencia americana, una poderosa ilustración del impacto del “mercado de las ideas económicas” en el campo de la jurisprudencia.

Finalmente llegamos a los trabajos de quienes editamos este número. Enrique Gherzi Silva se ocupa de dotar de contenido sustantivo a una conocida metáfora hidráulica que ilustra el origen del derecho, apelando a la idea de competencia entre “las fuentes del derecho”. De ese modo muestra la naturaleza eminentemente evolutiva, cultural y económica de la ley, en contraposición a la clásica visión racionalista del sistema legal.

Por último, el trabajo de Eduardo Stordeur pretende mostrar que la actual exigencia de adecuar el capital social al objeto social en el derecho de las sociedades, “perfectamente aplicada”, llevaría a una extraña paradoja: debería eliminar cualquier noción plausible de la función empresarial y por lo tanto, al mismo tiempo, aquellos proyectos precisamente más eficientes. Intenta mostrar, que además de “irracional” desde el punto de vista de los incentivos, la misma lleva a resultados ineficientes.

Esperamos que el presente número de RIIM sea de utilidad para todos aquellos interesados en la relación entre la economía y las instituciones, y en especial para aquellos interesados en la economía del derecho, de la constitución y de las decisiones colectivas.

Enrique Gherzi Silva

Profesor Titular de la Universidad de Lima
Académico Adjunto del CATO INSTITUTE

Eduardo Stordeur

Investigador de Fundación Hayek
Profesor titular de ESEADE
Profesor de Posgrado UBA